

Diagnóstico del estado de situación de la evaluación ambiental 2020





Autoridades

Presidente de la Nación

Alberto Fernández

Vicepresidenta de la Nación

Cristina Fernández de Kirchner

Jefe de Gabinete de Ministros

Juan Luis Manzur

Ministro de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Juan Cabandié

Unidad Gabinete de Asesores

María Soledad Cantero

Secretario de Cambio Climático,
Desarrollo Sostenible e Innovación

Rodrigo Rodríguez Tornquist

Directora Nacional de
Evaluación Ambiental

Jessica Motok

Equipo de realización

Coordinación

Soledad González Arismendi

Redacción y asesoría técnica

Diego Del Río

Gustavo Choconi

Juan Martín Sánchez

Inés Castelló

María Susana Lopreiato

Sol Herman

Vicente Ferrer Alessi

Victoria Arias Mahiques

Victoria Rodríguez de Higa

Índice

Introducción	5
1. Contexto internacional	6
1.1. Evaluación ambiental en contexto del COVID-19	6
1.2. La evaluación ambiental y los Objetivos de Desarrollo Sostenible	7
1.3. Fortalecimiento institucional y regulatorio de la evaluación ambiental a nivel regional	8
2. Contexto nacional	9
2.1. Marco normativo de la evaluación ambiental en Argentina	9
2.2. Evolución normativa EIA en el ámbito nacional	10
2.3. Marco normativo y promoción de la EAE	15
3. Diagnóstico nacional	17
3.1. Procedimiento de evaluación de impacto	17
3.2. Seguimiento y monitoreo	25
3.3. Consultores en evaluación ambiental	28
3.4. Participación y acceso a la información pública ambiental	29
3.5. Tendencias en evaluación ambiental a nivel nacional	40
Referencias	46



Introducción

La evaluación ambiental es la valoración del ambiente para su comprensión y la toma de decisiones informadas con respecto a una iniciativa. A este fin se considera al ambiente como un sistema complejo y dinámico resultante de la interacción de los componentes biótico, abiótico y social en una unidad espacio-temporal.

Esta es implementada a través de un conjunto de herramientas y procedimientos que son clasificados según su propósito. Dentro de este conjunto se encuentran la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que permite a la autoridad tomar una decisión informada respecto de la viabilidad ambiental de un proyecto, y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que se aplica a políticas, planes o programas gubernamentales.

El presente documento, elaborado desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, muestra el estado de situación en materia de evaluación ambiental, tanto a nivel normativo como respecto a buenas prácticas y tendencias.

Tras haber evidenciado la utilidad del primer y segundo *Diagnóstico del estado de situación de la evaluación ambiental*¹, como documentos integradores relativos a la evaluación ambiental, se busca en esta oportunidad proveer una actualización de la información disponible y continuar con el compromiso de promover el acceso a la información en materia de evaluación ambiental. En ese sentido, los datos que aquí se presentan constituyen un insumo fundamental para el cumplimiento de los artículos 17 y 18 de la Ley n.º 25675, Ley General del Ambiente. A su vez, en la presente edición se busca integrar nuevos temas y desafíos que fueron identificados como de interés en el marco de la Agenda 2030 y en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Esta publicación se estructura en tres capítulos: el primero ofrece una descripción general del contexto internacional y regional en evaluación ambiental; el segundo presenta la normativa vigente pertinente a nivel nacional; el tercero describe los resultados del diagnóstico de situación de la evaluación ambiental en el país hasta diciembre de 2020. Este último capítulo se presenta en secciones temáticas, que contiene datos comparables con las ediciones anteriores y nuevos datos en temas específicos, incluyendo participación pública en el contexto del COVID-19, cambio climático y tendencias en evaluación de impacto.

Los resultados de este diagnóstico son centralmente el producto de la encuesta realizada a las autoridades ambientales provinciales en el marco de la Comisión de Impacto Ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) (creada por Resolución n.º 42/2017).

1. <https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/evaluacion-ambiental/impacto/diagnostico>

La presente edición constituye así la actualización de las ediciones de 2018 y 2019, sobre la base de lo dispuesto por la Ley General del Ambiente n.º 25675, como ley marco y considerando asimismo que todas las jurisdicciones poseen normativa propia que regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Cabe destacar que la sanción de la Ley n.º 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (B.O. 20-nov-2019) y la reciente sanción de la Ley n.º 27566 (B.O. 19-oct-2020) que aprueba el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú”, son consideradas dos hitos normativos y, por lo tanto, se incluyen en la realización del presente diagnóstico.

1. Contexto internacional

1.1. Evaluación ambiental en contexto del COVID-19

Durante 2020, los efectos del COVID-19 afectaron todos los ámbitos institucionales a nivel global, incluyendo la implementación de la evaluación ambiental. Entre los principales desafíos se encontró la continuidad de la efectiva realización de los procedimientos de evaluación de impacto por la necesidad de respetar las restricciones de circulación de los gobiernos locales.

Según una encuesta de la Asociación Internacional para la Evaluación de Impacto (IAIA, 2020) dentro de los principales efectos del COVID 19 sobre la evaluación ambiental, se halló que:

- aumentó drásticamente el número de profesionales de evaluación de impacto que realizan trabajo remoto;
- el 73% de las y los profesionales a quienes se encuestó a nivel global abandonaron temporalmente el trabajo de campo, debido a las restricciones de circulación;
- se redujo el número de consultas y eventos de participación pública debido a la necesidad de distanciamiento social; y
- el 40% de las y los profesionales de evaluación de impacto cree que el COVID-19 se utilizará como una razón para diluir o limitar temporal o permanentemente los procedimientos de control y gestión ambiental.

Se evidencia en lo relevado por la encuesta la necesidad de rediseñar los modos de trabajo de las y los profesionales que se dedican a evaluación de impacto y realizar cambios en las técnicas futuras de seguimiento y gestión.

Tanto las consultas públicas como el trabajo de campo son esenciales para la obtención de datos primarios y para garantizar la calidad de las evaluaciones de impacto, dados los roles clave que estas dos instancias tienen en la definición y validación de los resultados de la evaluación. En esta línea, desde el VIII Diálogo Regional de Política sobre Licenciamiento y Cumplimiento Ambiental, realizado entre mayo y julio de 2020, se ha destacado la importancia, a nivel global, de las tecnologías e innovación en los procedimientos a fin de garantizar la participación pública y los procesos de seguimiento.

En este cuadro internacional, la recuperación económica debe focalizarse en la protección del ambiente y la calidad de vida de la población como punto de partida para rediseñar políticas, planes, programas y proyectos desde el desarrollo sostenible, con el fin de dar protección integral al ambiente y garantizar la inclusión de toda la ciudadanía.

1.2. La evaluación ambiental y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los ODS constan de 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores que equilibran las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Están destinados a orientar los esfuerzos hacia el desarrollo sostenible en las próximas décadas, en particular entre 2020 y 2030, período que se conoce como la “Década de Acción”. Tanto gobiernos como sector privado y sociedad civil deben hacer su contribución de manera de alcanzar estos objetivos a 2030.

La evaluación ambiental integra e incorpora consideraciones de sostenibilidad en la planificación del desarrollo y la toma de decisiones, tanto a nivel estratégico como en proyectos de obras de infraestructura. Según lo expresado por la IAIA (2019), las oportunidades de incorporar los ODS a las evaluaciones se presentan principalmente a nivel estratégico, en la búsqueda de la armonización de las normativas y políticas nacionales con políticas, planes y programas de desarrollo inspiradas en los ODS; por ejemplo, en infraestructura resiliente ante el cambio climático, acceso al agua y saneamiento, promoción de las energías renovables y la generación de empleo local.

Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2019) se resalta puntualmente la importancia de la normativa en evaluación de impacto ambiental para lograr estos objetivos, por tratarse de uno de los pocos regímenes legales en materia ambiental que involucra la participación pública como elemento central para la toma de decisión —en este caso, sobre la viabilidad de un proyecto—.

En cuanto a los temas relevantes para la evaluación de impacto, se destaca a nivel global la preocupación por el cambio climático, reflejada en el ODS 13, “Acción por el clima”. Según el último informe publicado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente

(AIDA) el estudio de impacto ambiental (EsIA) “debería evaluar los posibles impactos en materia de cambio climático que un proyecto o actividad podría tener, así como los impactos que la crisis climática podría tener en el proyecto o actividad” (AIDA, 2021, p. 16). De este modo, los posibles impactos de un proyecto o actividad han de ser evaluados primero en términos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y luego con respecto a su adaptación a los efectos del cambio climático.

1.3. Fortalecimiento institucional y regulatorio de la evaluación ambiental a nivel regional

Durante noviembre de 2020 se impulsó la creación de la Red Latinoamericana del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (REDLASEIA), al cual asistieron representantes de Chile, México, Panamá, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Honduras, Colombia y Argentina.

La coordinación temporal de esta red se encuentra a cargo del Servicio de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) de Perú. Su objetivo es compartir experiencias a nivel latinoamericano, propiciar el intercambio de prácticas sobre la evaluación de impacto ambiental y proyectos de inversión en la región, y contribuir a que los procesos sean más participativos.

Por otra parte, a nivel de regulaciones de la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales, el hito más relevante para la región fue la entrada en vigor el 22 de abril de 2021 del Acuerdo de Escazú: Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Los objetivos del Acuerdo se basan en “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales” (Artículo 1). Es asimismo una de sus bases la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, de modo de contribuir a la protección del derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano y apto para el desarrollo, tanto para las generaciones presentes como para las futuras. Puntualmente en lo relacionado con la evaluación ambiental, el artículo 7 establece el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existan acciones que puedan tener un impacto significativo.

2. Contexto nacional

2.1. Marco normativo de la evaluación ambiental en Argentina

La Ley General del Ambiente n.º 25675, sancionada en 2002, es la ley marco en materia de presupuestos mínimos. La norma incorpora el procedimiento de EIA como instrumento de política y gestión ambiental (art. 8) y dispone que toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afecte la calidad de vida de la población en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución (art. 11). Seguidamente, la norma indica que las personas físicas o jurídicas den inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente (art. 12).

En ese sentido, la Ley General del Ambiente dicta que las autoridades competentes determinen la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos deberán estar detallados en ley particular. Serán así las autoridades jurisdiccionales competentes quienes lleven adelante una evaluación de impacto ambiental y emitan una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados en el ámbito de su competencia.

Asimismo, la Ley General del Ambiente dispone que los estudios de impacto ambiental deben contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente y las acciones destinadas a mitigar sus efectos negativos (art. 13).

De acuerdo con este marco normativo, coexisten entonces los presupuestos mínimos indicados previamente en los artículos citados, las regulaciones de evaluación ambiental de cada jurisdicción y las regulaciones de evaluación ambiental de la autoridad ambiental nacional, es decir, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

2.2. Evolución normativa de EIA en el ámbito nacional

La evolución normativa de la EIA es el resultado de un proceso dinámico e iterativo basado en las experiencias de cada jurisdicción, sus monitoreos, revisiones e indicadores, que generan la necesidad de actualizar la normativa existente. A continuación se presenta una recta histórica (**Figura 1**) con la evolución normativa en el ámbito nacional hasta 2020; seguida de una tabla con la normativa vigente de todas las jurisdicciones del país (**Tabla 1**).

Desarrollo normativo en evaluación ambiental en el ámbito nacional

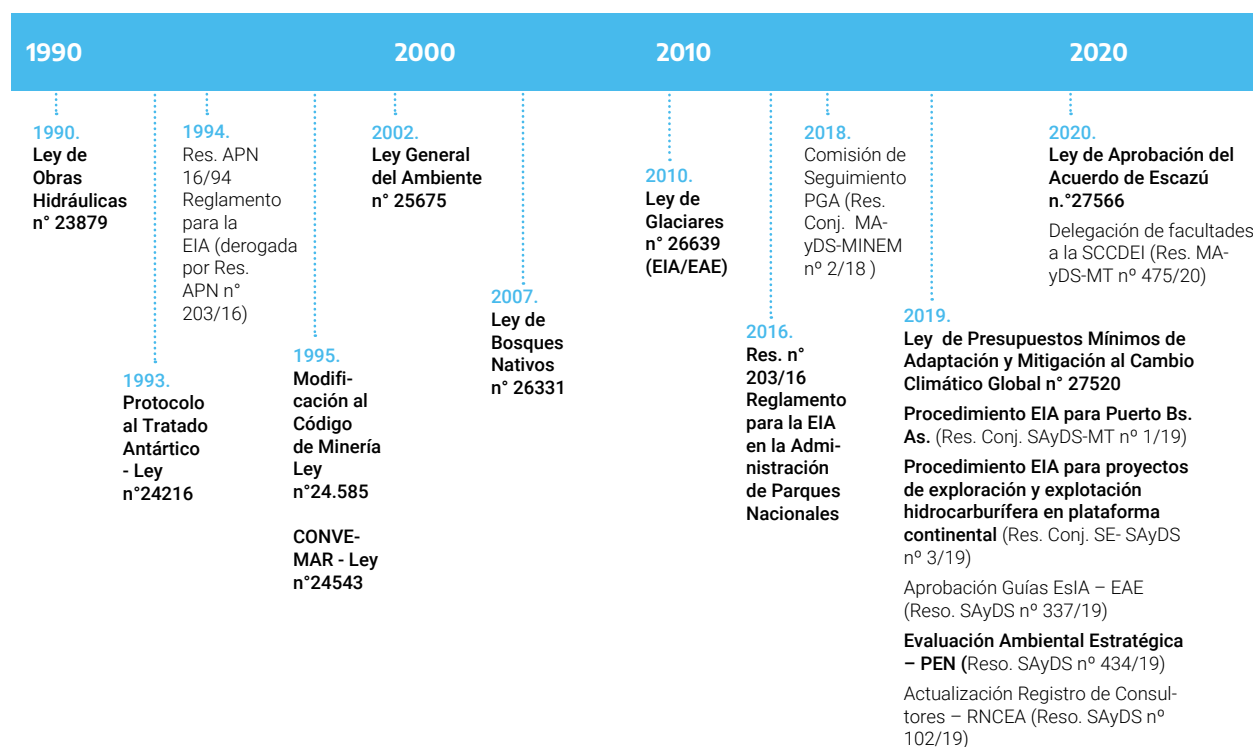


Figura 1. Desarrollo normativo en evaluación ambiental en el ámbito nacional.

Fuente: elaboración propia en base a revisión normativa.



Normativa vigente por jurisdicción en evaluación ambiental

Jurisdicción	Normativa	Enlace de acceso
Buenos Aires	Ley n.° 11723	http://www.opds.gba.gov.ar/sites/default/files/Ley%20%2011723.pdf
	Ley n.° 11459	https://normas.gba.gob.ar/documentos/V90JIsPx.html
CABA	Ley n.° 123 y sus modificatorias.	http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/impacto-ambienta
Catamarca	Disposición n.° 74/2010	https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/producciones_sostenibles/legislacion/provincial/_archivos//000005-Legislaci%C3%B3n%20Ambiental%20General/000003-Catamarca/007410DISPOSICION%2074-10%20EIA.doc
Chaco	Ley n.° 3964	http://portal1.chaco.gov.ar/uploads/multimedia/archivo/_Ley%203964.pdf.pdf
	Ley n.° 5562 (EAE)	http://portal1.chaco.gov.ar/uploads/multimedia/archivo/_LEY%205562.doc.doc
	Resolución n.° 674	https://chaco.gov.ar/pagina/1782/normativas-evaluacion-ambiental
Chubut	Ley XI n.° 35	http://www.ambiente.chubut.gov.ar/procedimiento-eia
	Decreto n.° 185/2009	http://www.ambiente.chubut.gov.ar/wp-content/uploads/2014/05/Decreto-185.pdf
	Decreto n.° 1003/2016	http://www.ambiente.chubut.gov.ar/wp-content/uploads/2016/07/Decreto-1003-16.pdf
Córdoba	Ley n.° 10208	https://www.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2014/07/LEY-DE-POLITICA-AMBIENTAL-DE-LA-PCIA-10208.pdf
Corrientes	Ley n.° 5067 y sus modificatorias.	http://www.icaa.gov.ar/Documentos/Ges_Ambiental/leyn5067EIA.pdf
	Ley n.° 5517	https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/producciones_sostenibles/legislacion/provincial/_archivos//000005-Legislaci%C3%B3n%20Ambiental%20General/000007-Corrientes/005517-ley%205517%20MODIFICA%20LEY%205067%20EIA.pdf
	Decreto n.° 2858/12	http://www.icaa.gov.ar/Documentos/Ges_Ambiental/decreto2858_12.pdf
	Resolución ICAA n.° 366/16	http://www.icaa.gov.ar/Documentos/Ges_Ambiental/res366_16.pdf
Entre Ríos	Decreto n.° 4977/09	http://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Normativas/Provinciales/DECRETO_4977.pdf
	Decreto n.° 3498/16	http://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Normativas/Provinciales/DECERTO_3498_2016_GOB.pdf

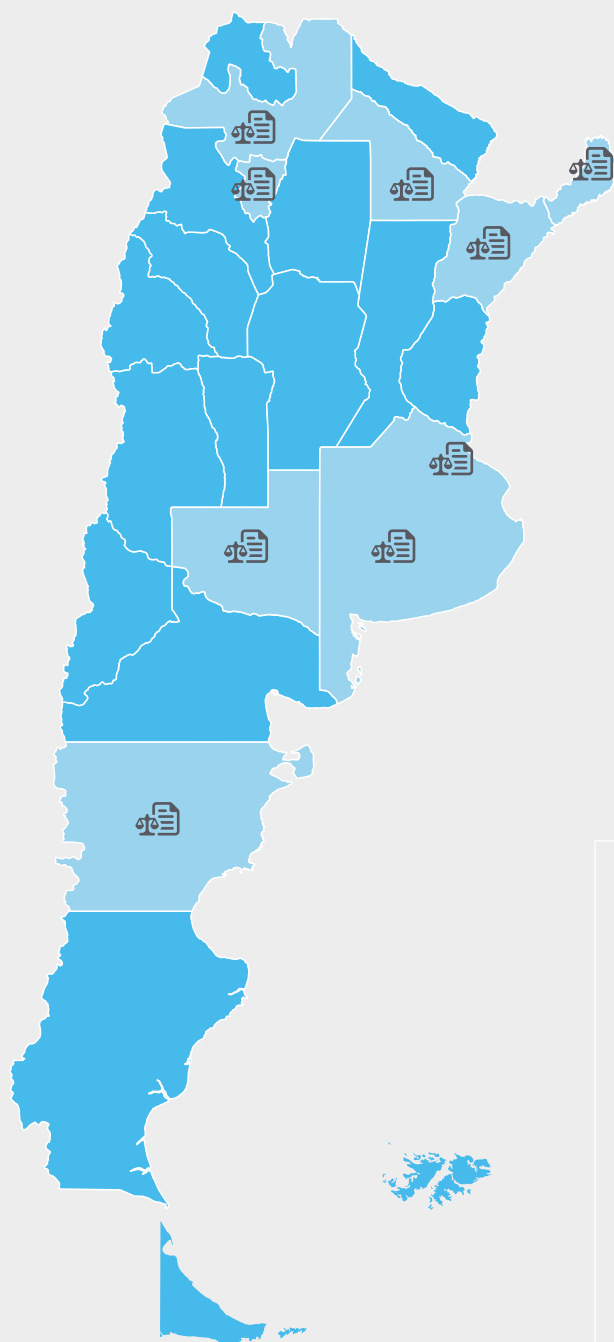


Jurisdicción	Normativa	Enlace de acceso
Formosa	Ley n.° 1060 y Decreto n.° 557/98	https://www.formosa.gob.ar/modulos/produccion/templates/files/polocientifico/ley1060.pdf
Jujuy	Ley n.° 5063 -n.° 5980/06 y n.° 9067/07 Decreto n.° 5980/06 y Decreto n.° 9067/07	http://www.ambientejujuy.gob.ar/wp-content/uploads/2017/08/B-5063-LEY-GENERAL-DE-MEDIO-AMBIENTE-1.pdf http://www.ambientejujuy.gob.ar/wp-content/uploads/2017/12/COMPENDIO-DE-LEYES-AMBIENTALES-JUJUY_2017.pdf
La Rioja	Ley n.° 7801 Ley n.° 8355	http://www.boletinoflarioja.com.ar/pdf/2005/2005-03-29-B.pdf https://legislaturalarioja.com/legislacion/ley-no-8-355/
La Pampa	Ley n.° 1914 Decreto reg.EIA n.° 2139/03	https://ambiente.lapampa.gob.ar/images/stories/Imagenes/Archivos/Evaluacion_impacto_ambiental/Ley_1914.pdf https://ambiente.lapampa.gob.ar/images/stories/Imagenes/Archivos/Normativa/Decreto_2139_Reg_de_la_ley_ambiental.pdf
Mendoza	Ley n.° 5961 Decreto n.° 2109/94 Decreto n.° 809/2013	https://www.mendoza.gov.ar/ambiente/wp-content/uploads/sites/14/2017/07/5961.pdf https://www.mendoza.gov.ar/ambiente/wp-content/uploads/sites/14/2017/07/decreto2109.pdf https://www.mendoza.gov.ar/ambiente/organismos/unidad-de-evaluaciones-ambientales/legislacion-uea/
Misiones	Ley XVI - n.° 35 -Resolución n.° 464/08	http://digestomisiones.gob.ar/uploads/documentos/leyes/LEY%20XVI%20-%20N%2035.pdf
Neuquén	Ley n.° 1875 y n.°2267 Decreto n.° 2656/99	https://ambiente.neuquen.gov.ar/ley-1875-t-o-2267/ https://ambiente.neuquen.gov.ar/frmrwrk/pdfs/ley_1875/1875(TO2267).pdf
Río Negro	Ley n.° 3266	https://www.legisrn.gov.ar/L/L03266.html
Salta	Ley n.° 7070 y Decreto 3097/2000	http://ambiente.salta.gov.ar/assets/uploads/documentos/ley_7070.pdf Decreto 3.097
San Juan	Ley n.° 6571 y modificatorias. Decreto 2067/97	http://ambiente.sanjuan.gob.ar/estaticas/docs/legislacion_ambiental_sanjuan.pdf
San Luis	Ley n.° IX-0876 Decreto n.° 7755 -MMA-201	http://www.medioambiente.sanluis.gov.ar/impacto-ambiental/?doing_wp_cron=1613152672.7118461132049560546875 http://www.ministeriomacp.sanluis.gov.ar/wp-content/uploads/2016/07/DECRETO-REGLAMENTA-RIO-N_-7755-MMA-2014.pdf



Jurisdicción	Normativa	Enlace de acceso
Santa Cruz	Ley n.° 2658	http://saludsantacruz.gob.ar/secretariadeambiente/wp-content/uploads/2017/10/Ley-N%C2%BA-2658.doc
Santa Fe	Ley n.° 11717 Decreto n.° 0101/03	https://www.santafe.gov.ar/normativa/item.php?id=108183&cod=e1e21d87a7a9947a5ba170e464499bdc https://www.santafe.gov.ar/normativa/item.php?id=75160&cod=0235349b221e9b3efc11a0ea9909f28a
Stgo. del Estero	Ley n.° 6321 Decreto n.° 506/2000	https://defensorsantiago.gob.ar/docs/leyes/RecursosNaturales6321.pdf https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/producciones_sostenibles/legislacion/provincial/_archivos//000004-Lecher%C3%ADa/000022-Santiago%20del%20Estero/050600-dec%20506-00%20reglam%20ley%206321.pdf
Tierra del Fuego A. e I. A. S.	Ley n.° 55 Decreto n.° 1333/93	http://www.legistdf.gob.ar/lp/leyes/Provinciales/LEYP055.pdf https://desarrollosustentable.tierradelfuego.gob.ar/wp-content/uploads/2017/04/Decreto-N%C2%BA1333-93.pdf
Tucumán	Ley n.° 6253 Decreto n.° 2204/91	https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/producciones_sostenibles/legislacion/provincial/_archivos//000005-Legislaci%C3%B3n%20Ambiental%20General/000023-Tucum%C3%A1n/006253-LeyN%C2%B06253%20Normas%20grales%20y%20metod%20de%20aplicaci%C3%B3n.pdf https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/producciones_sostenibles/legislacion/provincial/_archivos//000005-Legislaci%C3%B3n%20Ambiental%20General/000023-Tucum%C3%A1n/220491-dec%202204-91%20reglamenta%20ley%206253.pdf

Tabla 1. Normativa vigente en evaluación ambiental por jurisdicción. Fuente: elaboración propia en base a revisión normativa y resultados de la encuesta 2020 realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA.



Provincias que actualizaron su
normativa entre julio de 2019
y septiembre de 2020



Buenos Aires
Chaco
Chubut
CABA
Corrientes
La Pampa
Misiones
Salta
Tucumán

Figura 2: Provincias
que actualizaron su
normativa entre julio
de 2019 y septiembre
de 2020.

Fuente: elaboración
propia en base a revisión
normativa y resultados
de la encuesta realizada
en la Comisión de
Impacto del COFEMA
en 2020.

A la fecha de la realización de esta encuesta, 8 jurisdicciones han actualizado su normativa en evaluación ambiental. La provincia de Misiones ha indicado también que se encuentra trabajando sobre la actualización de su normativa en la materia.



Temáticas que motivaron la actualización normativa de EIA

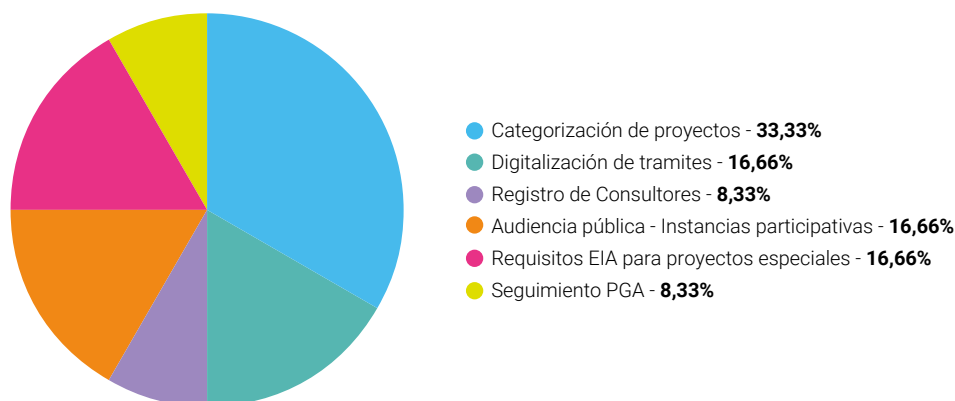


Figura 3: Principales temáticas de actualización normativa en EIA a nivel provincial.
Fuente: resultados de la encuesta realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA en 2020.

2.3. Marco normativo y promoción de la EAE

El propósito de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es promover la calidad ambiental y el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible en los procesos de planificación gubernamental, a través de la evaluación ambiental temprana de políticas, planes y programas. Su utilización representa un particular desafío en los países en desarrollo, al promover la armonización de los aspectos ambientales, sociales y económicos.

El desarrollo del marco normativo para la EAE es aún incipiente en Argentina; sin embargo, se han logrado avances significativos en la implementación de esta herramienta de gestión ambiental. A nivel nacional se encuentra vigente la Res. n.º 434/2019, que establece el procedimiento para la aplicación voluntaria de la EAE a políticas, planes y programas que se desarrollen en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

Durante 2020, con la finalidad de dar difusión a la nueva normativa, el procedimiento y la metodología para realizar una EAE de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la elaboración de una EAE, se realizaron capacitaciones virtuales para la Administración Pública Nacional. Asistieron a ellas más de 500 personas, incluyendo autoridades de direcciones y personal técnico, entre las cuales se destacan los siguientes organismos públicos:

- > Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- > Ministerio de Transporte
- > Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
- > Ministerio de Desarrollo Productivo
- > Ministerio de Obras Públicas
- > Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)
- > Instituto Nacional del Agua (INA)
- > Instituto de Tecnología Industrial (INTI)
- > Servicio Nacional de sanidad y calidad agroalimentaria (SENASA)
- > Instituto Nacional de la semilla (INASE)
- > Organismo Regulador del sistema nacional de aeropuertos (ORSNA)

Las normativas en EAE se han mantenido constantes en todas las jurisdicciones entre julio 2019 y septiembre 2020. Por su parte, la provincia de Misiones, ha aclarado que también se encuentra actualizando su normativa en la materia.



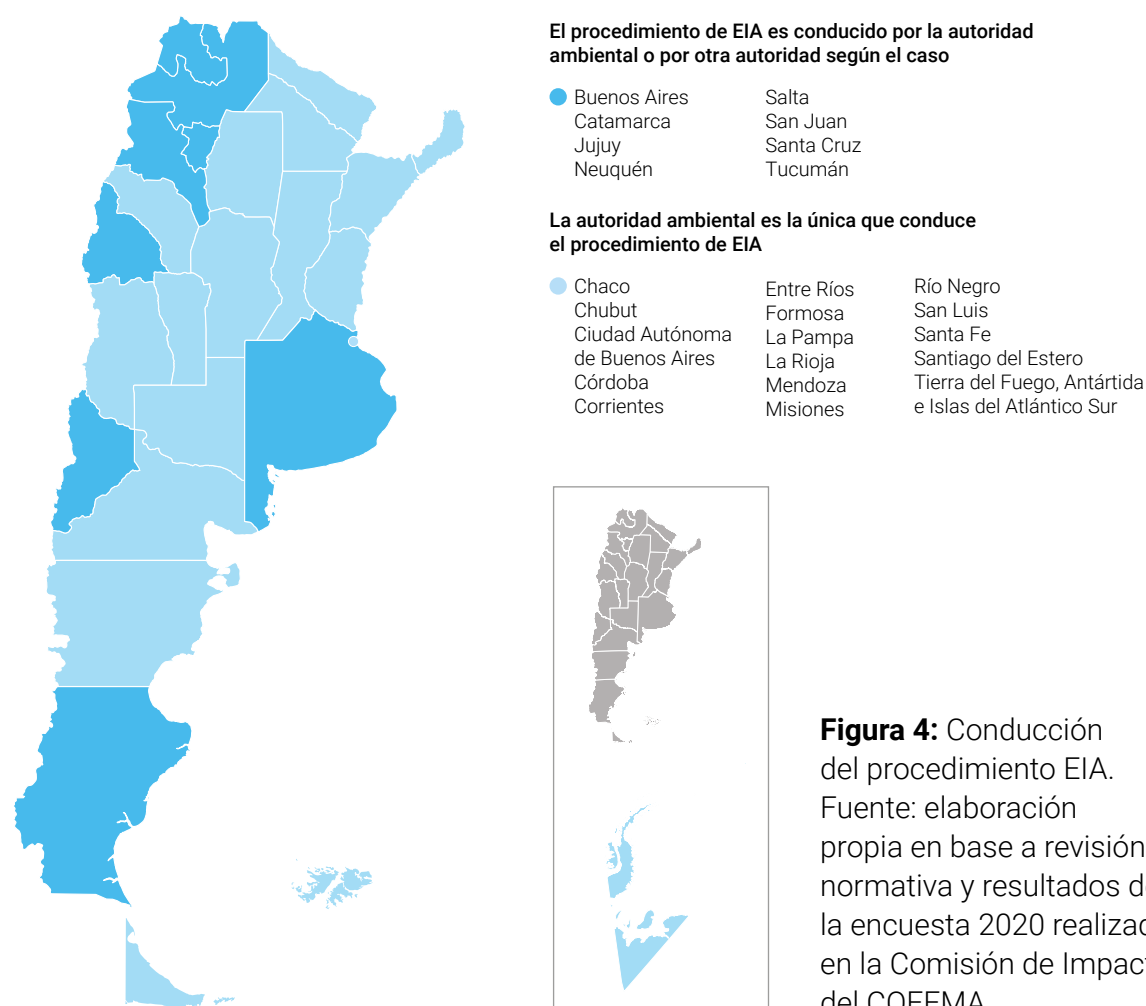
3. Diagnóstico nacional

A continuación se presentan los principales resultados de la encuesta de diagnóstico sobre el estado de situación de la EIA en Argentina, realizada durante 2020, en el marco de la Comisión de Impacto Ambiental del COFEMA.

Estos datos fueron proporcionados por las autoridades competentes en materia de EIA de las jurisdicciones y procesados por la Dirección Nacional de Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS).

3.1. Procedimiento EIA

¿La autoridad ambiental es la única que conduce el procedimiento de EIA?



Actualmente, en 16 de las 24 jurisdicciones, es la autoridad ambiental el único organismo que tiene a su cargo el procedimiento de EIA de todos los proyectos de obras o actividades. En 8 de las jurisdicciones, existen otros organismos que también llevan a cabo la evaluación de impacto ambiental de determinados proyectos. En el caso de proyectos relativos a la minería en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy y San Juan, la autoridad minera provincial es la encargada de sustanciar el procedimiento de EIA. En el caso de Salta, el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) es otorgado por el organismo competente en la materia principal de proyecto, no por la autoridad ambiental.

¿La autoridad ambiental solicita intervención de otros organismos en el procedimiento de EIA?

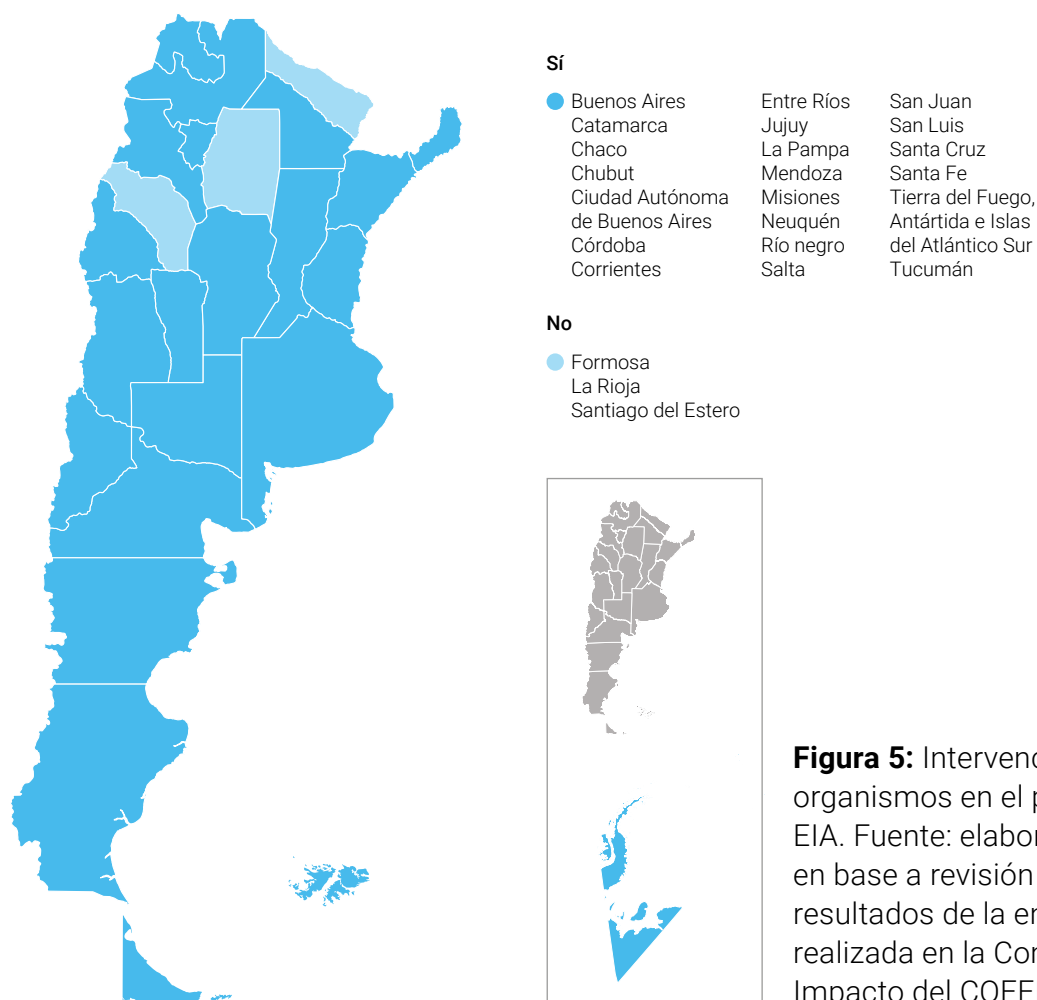


Figura 5: Intervención de otros organismos en el procedimiento EIA. Fuente: elaboración propia en base a revisión normativa y resultados de la encuesta 2020 realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA.

Las provincias que dan intervención a otros organismos en el marco del procedimiento de EIA los seleccionan en función de la información necesaria para llevar a cabo el procedimiento. Entre los organismos más consultados se encuentran las Direcciones provinciales de parques y reservas en los casos en que los proyectos se emplazan dentro de algún área protegida; los institutos provinciales del agua y Direcciones de recursos hídricos; los organismos de asuntos indígenas y las Secretarías de cultura y patrimonio arqueológico o paleontológico, entre otros. A nivel nacional, las regulaciones dictadas prevén la articulación con otras autoridades sectoriales nacionales. En el caso de la Res. Conjunta N° 1/19 MT-SAyDS, se contempla la intervención de la Autoridad Portuaria Nacional. A su vez, los procedimientos establecidos en la Res. Conjunta N° 3/19 SE-SAyDS prevén la intervención de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

El procedimiento de EIA se encuentra centralizado en un solo organismo (la autoridad ambiental) en las jurisdicciones de Formosa, Santiago del Estero y La Rioja.



¿Qué documento da inicio al procedimiento de EIA?

En la siguiente tabla se presentan los documentos que dan inicio al procedimiento de EIA según cada jurisdicción:

Jurisdicción	Aviso de proyecto	Formulario de categorización según el nivel de complejidad ambiental	EslA	Memoria técnica / Manifiesto	Otro	Observaciones
Buenos Aires		●	●		●	
Catamarca	●					
Chaco	●					
Chubut	●					
CABA		●	●			En algunos casos se presenta en simultáneo Formulario de Categorización y EslA.
Córdoba			●			
Corrientes	●					
Entre Ríos					●	Define la autoridad, de oficio
Formosa	●					
Jujuy				●		
La Pampa	●					
La Rioja		●				
Mendoza			●			
Misiones		●				
Neuquén					●	Con presentación del documento ambiental (Informe Ambiental, EIA) en caso de proyectos no ejecutados
Río Negro			●			
Salta	●		●			Los proyectos incluidos en el Anexo I del Decreto 3097/00, reglamentario de la Ley 7070, requieren Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) para lo cual deben presentar Estudio de Impacto Ambiental y Social (EslAyS). Para los proyectos no incluidos en el Anexo I, se solicita la presentación de Aviso de proyecto a partir del cual se determina si requiere o no contar con CAA. En caso afirmativo se establece qué documento técnico se deberá presentar, ya sea EslAyS o Declaración Jurada de Aptitud Ambiental (DJAA).
San Juan			●			
San Luis		●				
Santa Cruz				●		
Santa Fe		●				
Santiago del Estero			●			
Tierra del Fuego A. e I. A. S.	●					
Tucumán	●					
Nación (MAyDS)	●					
Total por categoría	10	6	8	2	3	

Tabla 2. Documentos que dan Inicio del procedimiento EIA. Fuente: elaboración propia en base a revisión normativa y resultados de la encuesta 2020 realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA.



¿Cómo se determina si un proyecto requiere o no tramitar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución?

El proceso por el cual se determina si un proyecto de obra o actividad requiere tramitar el procedimiento de EIA previo a su ejecución, se denomina categorización (*screening*), y se realiza aplicando diferentes criterios, según cada jurisdicción.

Estos criterios pueden ser agrupados en cuatro clases:

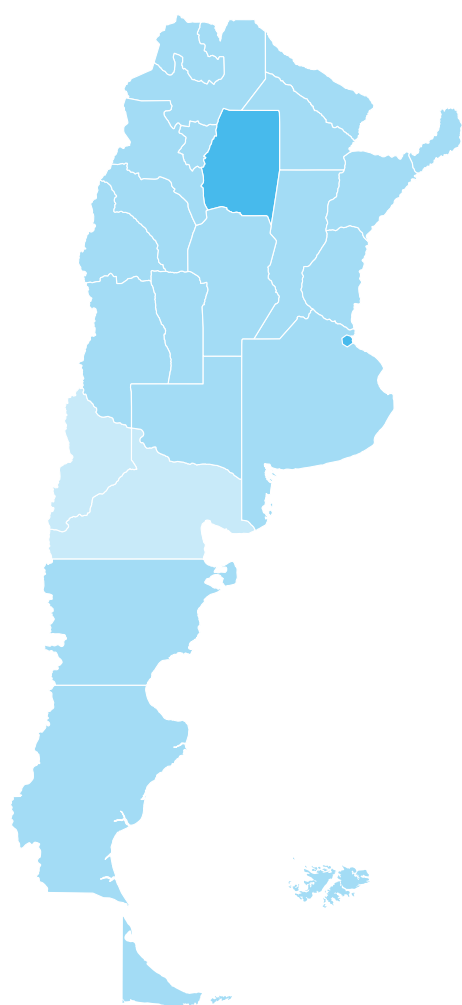
- En 16 jurisdicciones, incluyendo a la Nación, se determina si se requiere o no tramitar un proceso de evaluación ambiental a través de una lista de proyectos de obras o actividades, especificada en la normativa;
- En 3 jurisdicciones, se realiza a través de una categorización por fórmula y en 5 jurisdicciones se combinan estos dos criterios;
- Las jurisdicciones de Formosa y Tucumán establecen la facultad de determinar a criterio de la autoridad ambiental si se requiere o no cumplimentar con el procedimiento de EIA, sin perjuicio del uso de listas de proyectos de obra o actividad o fórmulas para determinar qué proyectos son considerados de significativo impacto ambiental.

A continuación se presenta el detalle de lo que ocurre en cada jurisdicción:

Jurisdicción	Lista de proyectos de obras o actividades	Categorización por fórmula	Una combinación de las anteriores	Criterio de la autoridad ambiental	Observaciones
Buenos Aires	●	●			Categorización por fórmula para industrias y por listado de proyectos para grandes obras o actividades.
Catamarca	●				
Chaco			●		Por asignación de puntos del 1 al 4 a la lista de actividades impactantes
Chubut	●				
CABA			●		
Córdoba	●				
Corrientes	●				Todos los proyectos presentan Aviso de Proyecto y depende de la categoría lo que deben presentar.
Entre Ríos		●			
Formosa				●	A partir del aviso de proyecto se remite al área técnica quien evalúa la situación de cada proyecto
Jujuy	●				
La Pampa	●				
La Rioja	●				
Mendoza	●				
Misiones	●				
Neuquén	●				
Río Negro			●		
Salta	●			●	El Anexo I del Decreto 3097/00, reglamentario de la Ley 7070, contienen un listado proyectos que requieren CAA. Los proyectos no incluidos en el Anexo I, quedan sujetos a criterio de la autoridad ambiental.
San Juan	●				
San Luis			●		
Santa Cruz			●		
Santa Fe		●			
Santiago del Estero	●				
Tierra del Fuego A. e I. A. S.	●				
Tucumán				●	Define el Consejo Provincial de Economía y Ambiente
Nación (MAyDS)	●				
Total por categoría	16	3	5	3	

Tabla 3. Criterios de categorización (*screening*) de proyectos. Fuente: elaboración propia en base a revisión normativa y resultados de la encuesta 2020 realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA.

¿Se prevé un procedimiento especial para proyectos que se emplacen en más de una jurisdicción?



Sí

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Santiago del Estero

No

- | | | |
|----------------|----------|-------------------|
| ● Buenos Aires | Jujuy | Santa Cruz |
| Catamarca | La Pampa | Santa Fe |
| Chaco | La Rioja | Tierra del Fuego, |
| Chubut | Mendoza | Antártida e Islas |
| Córdoba | Misiones | del Atlántico Sur |
| Corrientes | Salta | Tucumán |
| Entre Ríos | San Juan | |
| Formosa | San Luis | |

S/D

- Neuquén
- Río negro



Figura 6: Provincias que prevén en su normativa un procedimiento particular para proyectos interjurisdiccionales. Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta 2020 realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA.

Con el objetivo de lograr una evaluación integral de proyectos interjurisdiccionales, existen al momento, proyectos para una ley de presupuestos mínimos que regule el procedimiento de EIA en proyectos interjurisdiccionales. El desarrollo de estos proyectos normativos está llevándose adelante en el Senado y en mesas de diálogo al interior del COFEMA.

De acuerdo a los resultados de la encuesta 2020, hay dos jurisdicciones, la Provincia de Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya normativa prevé en el procedimiento de EIA una instancia diferencial para proyectos que se emplacen en su jurisdicción y en la de una provincia limítrofe. Estos casos requieren dictámenes de las áreas afectadas, mediante los cuales se presta conformidad al proyecto en estudio o se llevan a cabo convenios conjuntos.

Fuera de la esfera normativa, según los resultados de la encuesta, a 2020 existen 8 jurisdicciones que, en la práctica, han tenido experiencias en los últimos dos años con proyectos que se emplazan en dos o más jurisdicciones. Estas son las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Santa Fe, según se puede apreciar en el mapa a continuación (Figura 7). En general, se trata de proyectos de obras viales, tendido eléctrico, ductos e infraestructura de servicios, y extracción de arena en el caso de las provincias del Litoral.

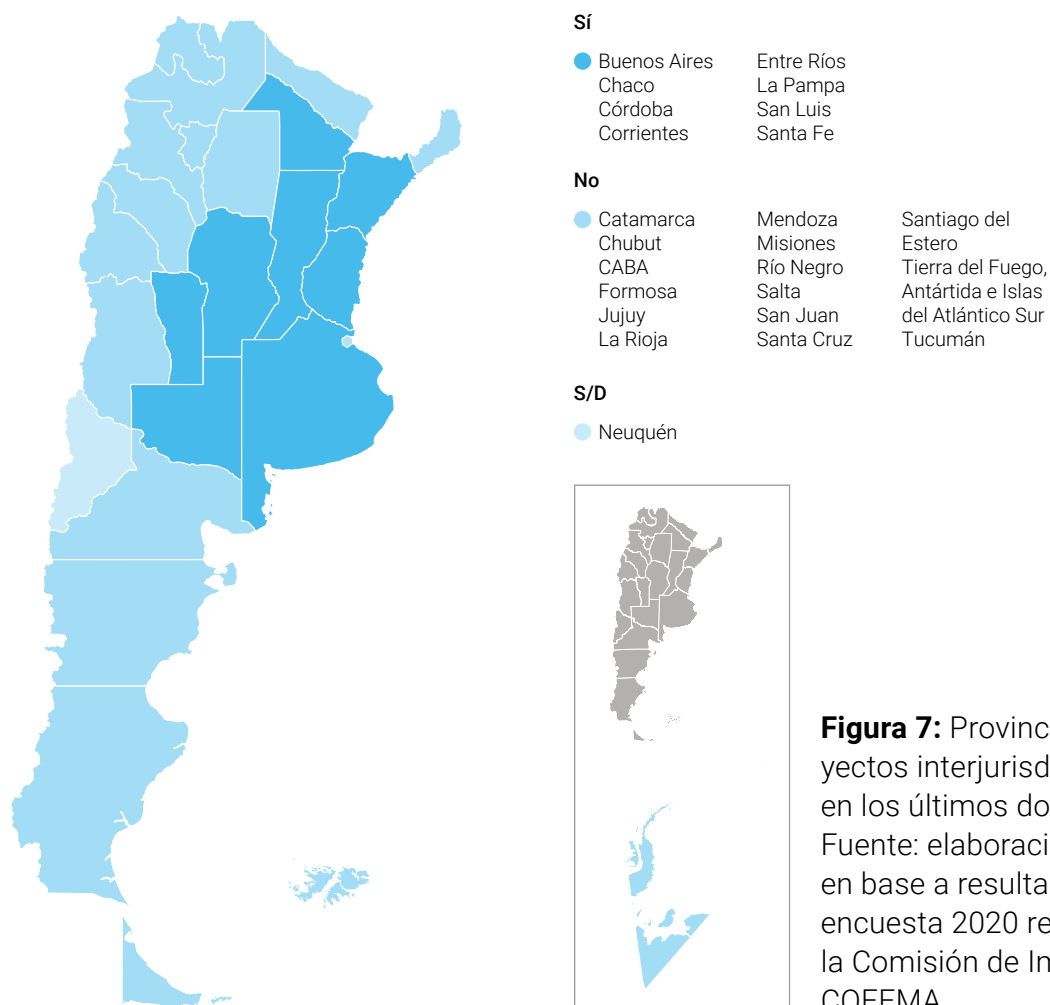


Figura 7: Provincias con proyectos interjurisdiccionales en los últimos dos años. Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta 2020 realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA.

3.2. Seguimiento y monitoreo

Plan de Gestión Ambiental

Actualmente, 21 de las jurisdicciones subnacionales y, además, el MAyDS requieren la presentación de un plan de gestión ambiental detallado previo a la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En los casos de Misiones, San Juan y Tierra del Fuego, se solicita asimismo información respecto a su financiamiento. En 18 jurisdicciones se requiere la revisión del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y, de corresponder, su actualización al momento de renovar la licencia ambiental en un determinado período.

Tabla 4. Alcances del Plan de Gestión Ambiental por jurisdicción. Fuente: elaboración propia en base a revisión normativa y resultados de la encuesta realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA.



Juris- dicción	Se requie- re PGA detallado en forma previa a la emisión de la DIA	Se requie- re PGA detallado + información sobre el financia- miento de las medidas del PGA	En caso de requerir renovación de la licencia ambiental por determinados periodos, se solicita la revisión de cumplimiento del PGA de manera previa a esa renovación	Observaciones
Buenos Aires	●		●	
Catamarca	●		●	La DIA se otorga por etapas (Proyecto, Construcción, Operación, Cierre).
Chaco	●		●	
Chubut			●	
CABA	●		●	
Córdoba	●		No aplica, la licencia se otorga por única vez	
Corrientes	●		●	
Entre Ríos	●		●	
Formosa	●		●	
Jujuy			●	
La Pampa	●		En la nueva Ley Ambiental y su decreto reglamen- tario (que está en revisión final). Actualmente no.	
La Rioja	●		●	
Mendoza	●		●	
Misiones	●	●	●	
Neuquén	●		No aplica, la licencia se otorga por única vez	
Río Negro	●		●	
Salta				El requerimiento del PGA detallado depende del organismo que otorgue el Certificado de Aptitud Ambiental. Lo mismo aplica para la renovación de la licencia ambiental, para la cual existen organismos que la otorgan por única vez y otros en los que debe renovarse periódicamente.
San Juan	●	●	●	
San Luis	●		●	
Santa Cruz			●	
Santa Fe	●		●	
Santiago del Estero	●		●	
Tierra del Fuego A. e I. A. S.	●	●	Generalmente las Resoluciones por las cuales se aprueba el Impacto Ambiental de la Actividad o Proyecto propuesto, cuentan con un ANEXO I en donde se establecen las medidas mínimas a cumplimentar para una adecuada gestión ambien- tal en todas su etapas y en algunos casos expresos se extiende la licencia por un periodo determinado y se condiciona su renovación al cumplimiento del ANEXO que se haya estipulado en ese acto. Pero en muchos casos se han otorgado la Licencias por única vez, sin necesidad de renovar la misma.	
Tucumán	●		No aplica, la licencia se otorga por única vez	
Nación (MAyDS)	●		No aplica, la licencia se otorga por única vez	
Total por categoría	21	3	18	



¿Existe un mecanismo de seguimiento o fiscalización del Proyecto previsto luego de otorgada la licencia ambiental?

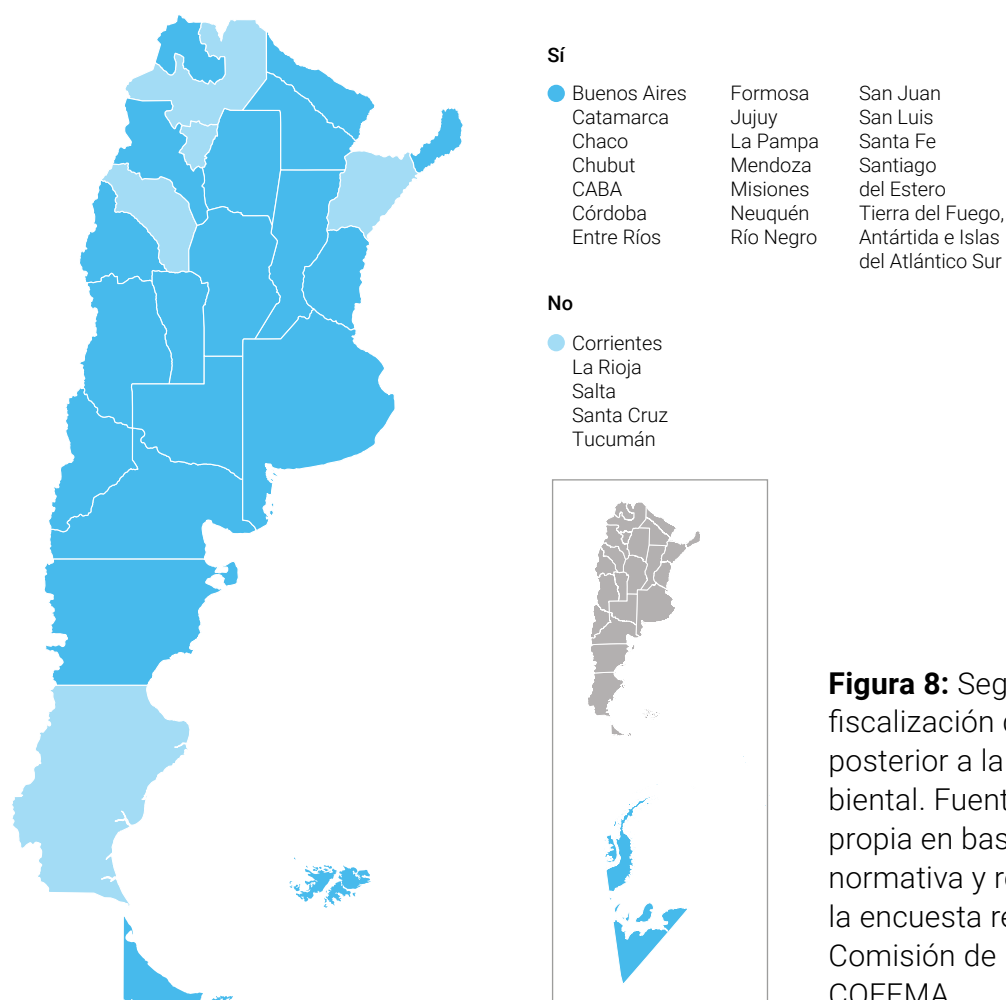


Figura 8: Seguimiento y fiscalización de proyectos posterior a la licencia ambiental. Fuente: elaboración propia en base a revisión normativa y resultados de la encuesta realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA.

Las jurisdicciones que cuentan con seguimiento y fiscalización del proyecto lo hacen a través de inspecciones *in situ* y mediante solicitud de presentación de informes.

Al menos en 11 jurisdicciones, las inspecciones y la presentación de informes se complementan, lo cual permite realizar un control en territorio y una revisión de expedientes por parte de la autoridad de control, para verificar el cumplimiento de la presentación periódica de informes referidos al Plan de Gestión Ambiental. En 6 jurisdicciones se establece únicamente el proceso de inspecciones. En 2 jurisdicciones se procede únicamente al seguimiento de los informes del Plan de Gestión Ambiental de cada proyecto. En relación al Diagnóstico realizado en 2019, las jurisdicciones de La Rioja y Santa Cruz modificaron su mecanismo de seguimiento.

3.3. Consultores en evaluación ambiental

Todas las jurisdicciones cuentan con un registro de consultores en evaluación ambiental, en el que deben inscribirse tanto las y los profesionales como las personas jurídicas que deseen elaborar los estudios e informes de impacto ambiental a ser evaluados en cada jurisdicción.

¿Cuenta con algún sistema de capacitación o actualización periódica para los inscriptos en el registro de consultores?

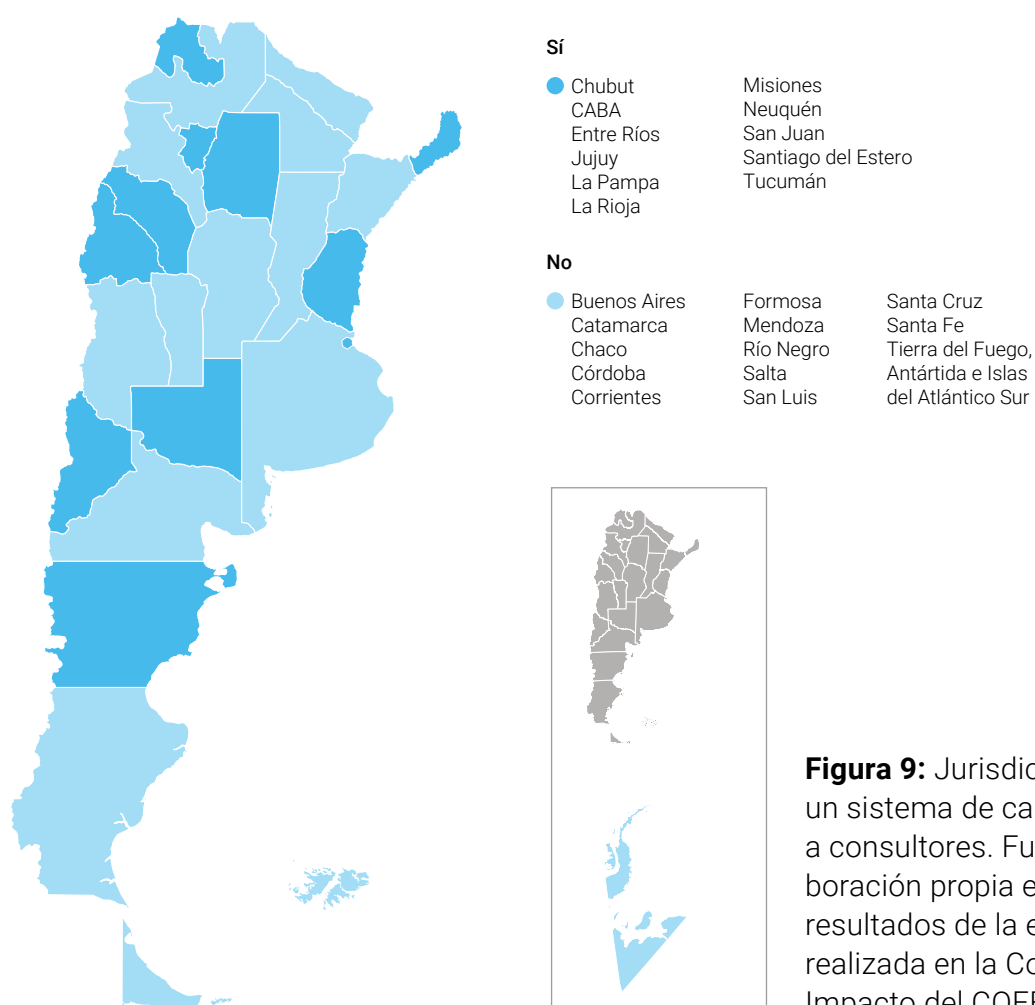


Figura 9: Jurisdicciones con un sistema de capacitación a consultores. Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta 2020 realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA.

Las instancias de capacitación suelen consistir en capacitaciones virtuales, talleres y convenios de formación con los colegios profesionales.

Con respecto a 2019, las provincias de Catamarca, La Pampa, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero incorporaron sistemas de capacitación para consultores. En el caso de CABA, esta capacitación es obligatoria para permanecer vigente en el Registro de Evaluación Ambiental. En el caso de La Pampa, se articulan capacitaciones de diversas temáticas ambientales con la Universidad Nacional de La Pampa.

3.4. Participación y acceso a la información pública ambiental

La participación pública³ y el acceso a la información pública ambiental constituyen ejes prioritarios en el procedimiento de EIA. Los mecanismos previstos en la Ley n.º 25675 General del Ambiente, para efectivizar el derecho a la participación a escala nacional, son las consultas y audiencias públicas.

La participación pública se ha convertido en un eje de vital importancia para el fortalecimiento de la democracia ambiental, en tanto se trata de un proceso interactivo de doble vía, en el que se persigue que los intereses, necesidades y preocupaciones prioritarias de la ciudadanía sean considerados en la toma de decisiones gubernamentales.

En este sentido, de manera creciente, la participación pública se vuelve un instrumento clave para responder a las necesidades de acceso a la información, consulta y justicia en materia ambiental. En el contexto de la evaluación ambiental, “la participación pública es el proceso de comunicación y diálogo que ocurre entre actores clave del ciclo de un proyecto o de una planificación con el propósito de mejorar la calidad de las decisiones públicas” (SAyDS, 2019).

Los esfuerzos de nuestro país en ampliar los derechos de participación de la ciudadanía y el acceso a la información ambiental pueden verse reflejados en la ampliación del marco normativo, con la reciente firma del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. El Acuerdo de Escazú, como se conoce popularmente, ratificado por Argentina a través de la Ley n.º 27566 (B.O 19/10/20) y en vigor a partir del 22 de abril de 2021, constituye el primer tratado vinculante que busca garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información ambiental de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno, y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido transgredidos.

3. La presente publicación utiliza el término de participación pública como sinónimo de participación social y participación ciudadana.

En el proceso de evaluación ambiental, la participación pública resulta una herramienta tanto para mejorar o alertar sobre determinados aspectos de la planificación o de los proyectos puestos a consideración, como para contribuir a la transparencia de los procesos y mejorar los planes de gestión. Así, la participación pública es un instrumento fundamental en la prevención de posibles conflictos socioambientales en torno a proyectos o planificaciones que puedan afectar los intereses o territorios de comunidades u organizaciones, puesto que asegura un mayor involucramiento, en pos de prevenir impactos adversos y potenciar los beneficios ambientales.

Durante 2020, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, las crecientes demandas de la ciudadanía en asuntos ambientales exigieron construir un nuevo escenario para el diseño y aplicación de las políticas públicas mediante la innovación en los canales y mecanismos de participación, para garantizar el acceso a las instancias participativas vigentes.



Durante el aislamiento social obligatorio que fue motivado por la pandemia por COVID-19, ¿se realizó alguna instancia participativa (consulta o audiencia) en modalidad virtual?

El distanciamiento social obligatorio producto del COVID-19 impulsó en algunos casos que la participación ciudadana se realizara a través de plataformas digitales o tecnológicas que permiten escuchar en una modalidad a distancia la voz de la ciudadanía, habilitar la participación, disminuir brechas y abrir información fundamental para poder incidir en la toma de decisiones en asuntos ambientales y anticipar problemáticas socioambientales que pueden afectar la calidad de vida de la población.

En particular, 10 jurisdicciones realizaron instancias participativas de manera virtual en 2020, y valoraron la experiencia como positiva, según los resultados de la encuesta de referencia.

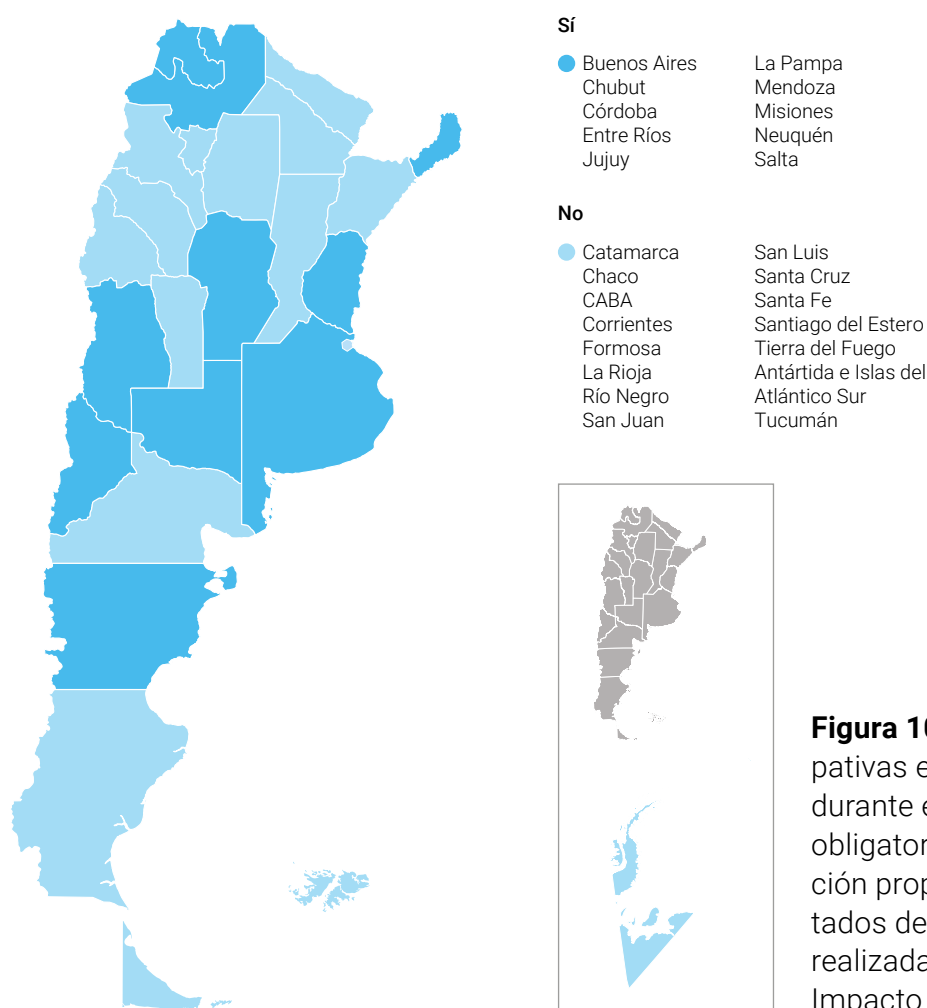


Figura 10: Instancias participativas en modalidad virtual durante el distanciamiento obligatorio. Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta 2020 realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA.

¿Cuenta con una plataforma web donde el público en general pueda descargar el estudio de impacto ambiental?

La Ley n.º 25831 de Acceso a la Información Pública Ambiental define qué se entiende por información pública ambiental para todo el territorio del país:

ARTÍCULO 2º – Definición de información ambiental. Se entiende por información ambiental toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. En particular:

- a) El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente;*
- b) Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente.*

El alcance es amplio, no limitándose a un tipo de documento en particular. Por ello se entiende que cualquier documento, en formato papel, digital o cualquier otro soporte, relacionado con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sostenible, es información pública ambiental.

Con respecto a la información pública ambiental, 9 jurisdicciones cuentan con una plataforma web donde el público en general puede descargar estudios de impacto ambiental completos o secciones de los mismos. Las provincias de Buenos Aires, Chubut, Jujuy y Mendoza publican en su página web oficial el estado de situación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los proyectos y, entre ellas, Chubut, Jujuy y Mendoza indican qué tipo de información se publica, junto con la frecuencia de actualización. En cuanto al documento de divulgación, se encuentra disponible al público a través de plataforma web en 7 jurisdicciones.

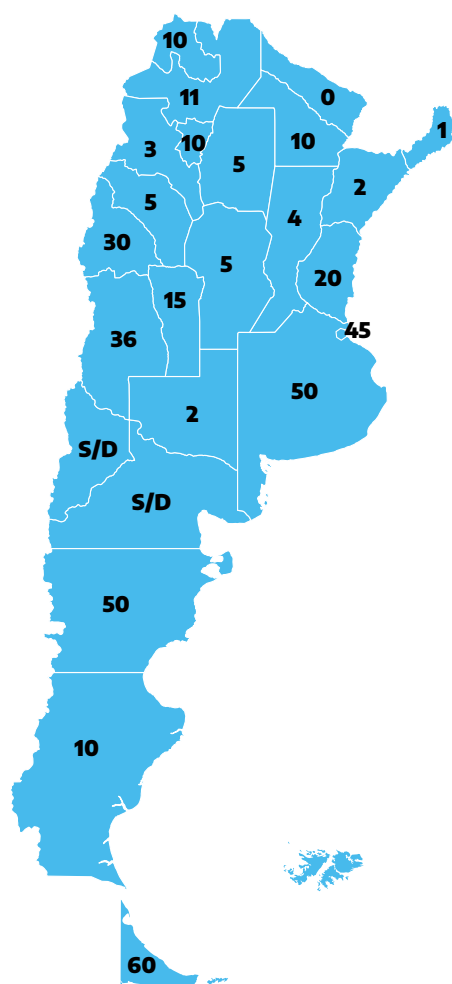


Información de la evaluación ambiental de los proyectos accesibles en línea, según jurisdicción, disponible a 2020

Juris- dicción	Estado de situación del proce- dimiento de EIA	Documento de Divul- gación	EsIA completo	Enlace de acceso
Buenos Aires	●	●	●	http://www.opds.gba.gov.ar/contenido/ParticipacionCiudadanaHome
Catamarca				-
Chaco				-
Chubut	●	●	●	http://www.ambiente.chubut.gov.ar/participacion-ciudadana/
CABA		●		-
Córdoba		●	●	https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/proyectos/
Corrientes				-
Entre Ríos				https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/index.php?codigo=78&codsubmenu=127&modulo=&codppal=
Formosa				-
Jujuy	●		●	https://www.ambientejujuy.gob.ar/expedientes-de-calidad/
La Pampa				https://ambiente.lapampa.gob.ar/audiencias-publicas-ambientales-h.html
La Rioja				-
Mendoza	●	●	●	ambiente.mendoza.gov.ar
Misiones				-
Neuquén			●	https://ambiente.neuquen.gov.ar/
Río Negro				-
Salta				-
San Juan				-
San Luis		●		-
Santa Cruz				-
Santa Fe				-
Santiago del Estero				-
Tierra del Fuego A. e I. A. S.				Acceder a la información acercándose a las sedes de las oficinas de la Secretaría de Ambiente
Tucumán			●	http://www.sematucuman.gob.ar/ Para determinados proyectos se publica el expediente completo
Nación (MAYDS)		●	●	https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/evaluacion-ambiental/audiencia-publica
Total por categoría	4	7	9	-

Tabla 5. Información de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos accesibles en línea, según jurisdicción. Fuente: elaboración propia en base a revisión normativa y resultados de la encuesta 2020 realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA.

¿Cuántos pedidos de información pública ambiental asociados a temas de impacto ambiental recibe al año (promedio de los últimos dos años)?



Buenos Aires	50	Misiones	1
Catamarca	3	Neuquén	S/D
Chaco	10	Río Negro	S/D
Chubut	50	Salta	11
CABA	45	San Juan	30
Córdoba	5	San Luis	15
Corrientes	2	Santa Cruz	10
Entre Ríos	20	Santa Fe	4
Formosa	0	Santiago del Estero	5
Jujuy	10	Tierra del Fuego	60
La Pampa	2	Antártida e Islas del Atlántico Sur	60
La Rioja	5	Tucumán	10
Mendoza	36		



Figura 11: Cantidad de pedidos de información pública ambiental en promedio de los últimos dos años. Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta 2020 realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA.

¿Cuáles son las principales temáticas respecto a pedidos de información pública ambiental asociados a temas de impacto ambiental en los últimos dos años?

Las principales temáticas sobre las que se solicita información pública ambiental por parte de la ciudadanía o de organizaciones sociales refieren a: en primer lugar, EIA en obras y EIA en industrias, seguidas por la participación pública en evaluación ambiental y, en menor medida, la ubicación de los proyectos y sus impactos.

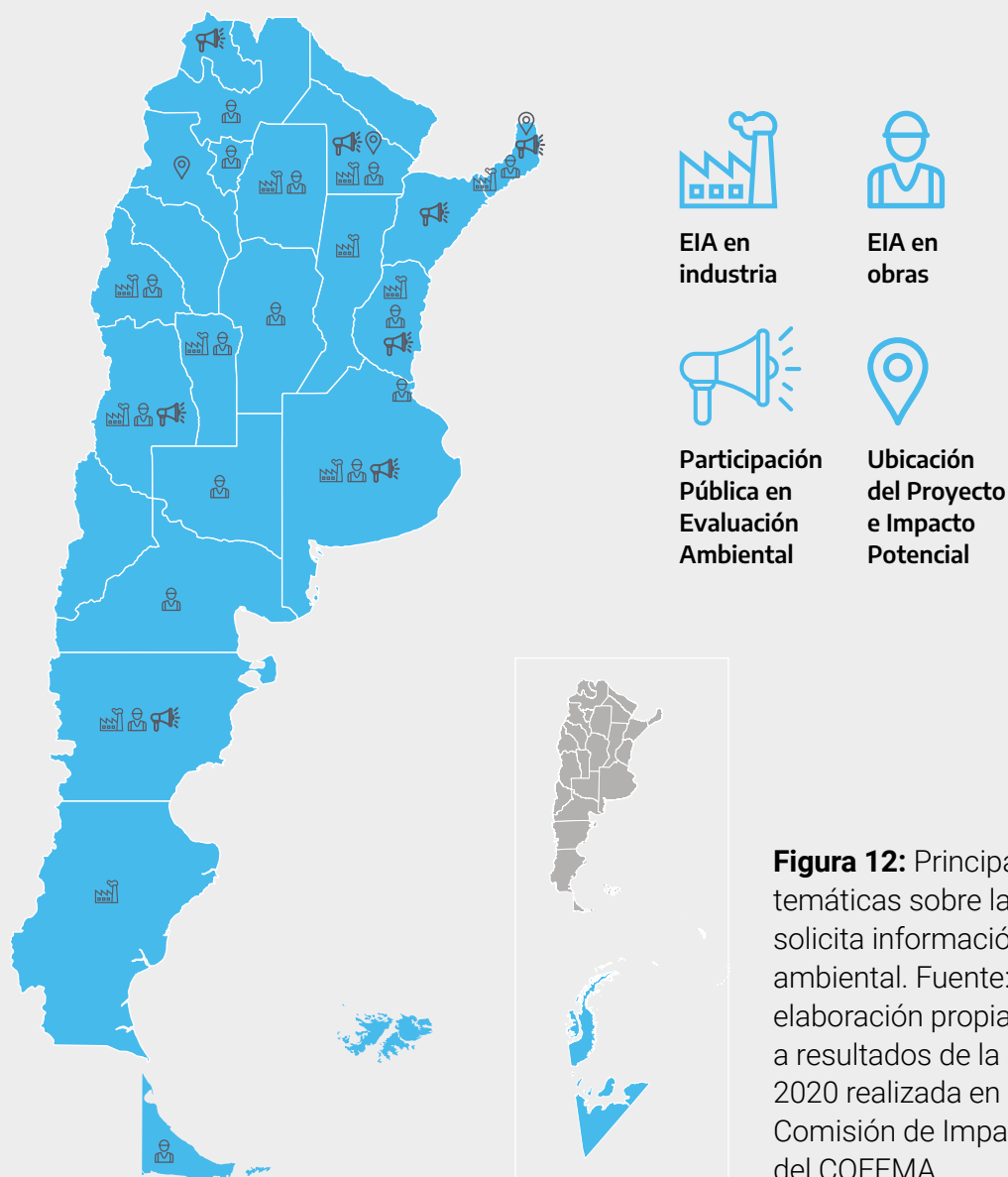
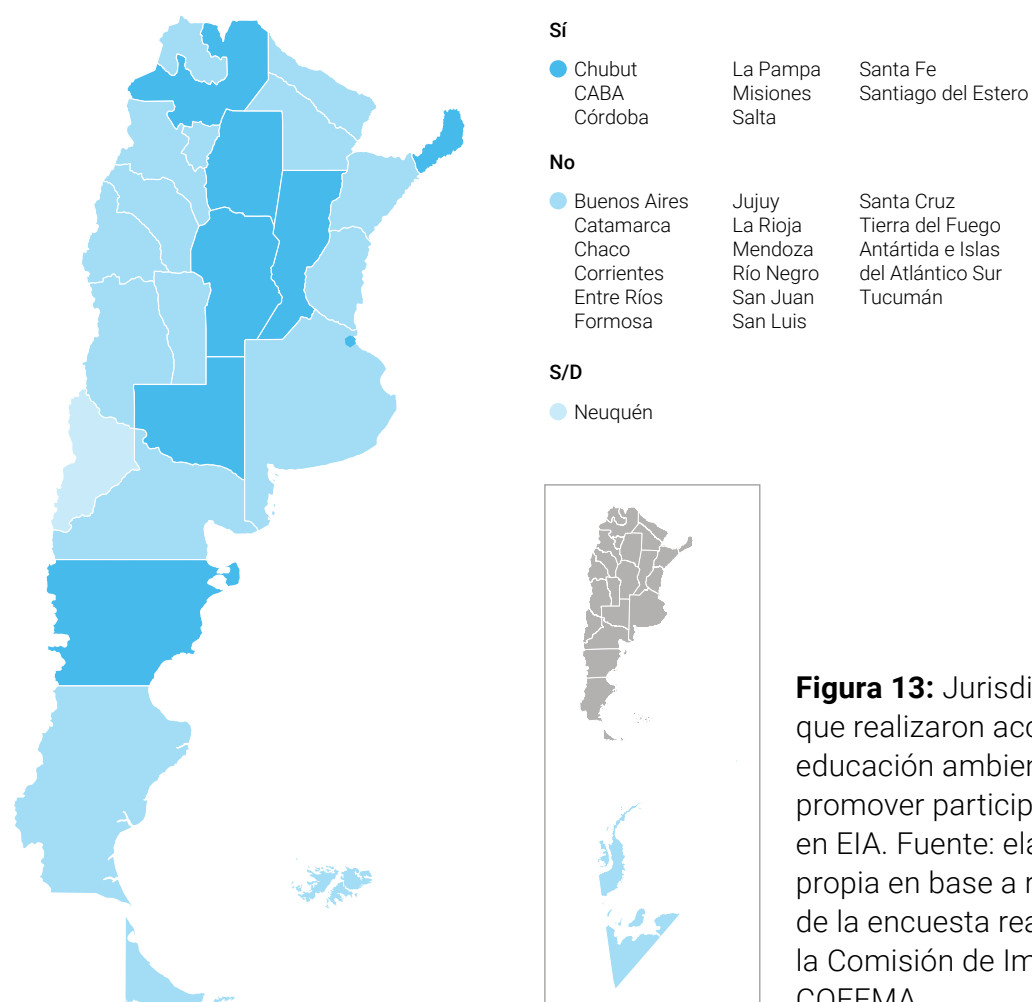


Figura 12: Principales temáticas sobre las que se solicita información pública ambiental. Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta 2020 realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA.

¿Se realizan acciones relacionadas con la educación ambiental para promover la participación pública en el marco de los procedimientos de EIA?

Durante 2020, 14 de las jurisdicciones han implementado actividades de formación a profesionales, referentes municipales, funcionarias y funcionarios, a fin de fortalecer las capacidades respecto a la promoción de la participación pública en los procedimientos de evaluación ambiental. Las jurisdicciones que no han realizado este tipo de actividades durante el año 2020, han declarado entender como necesario y prioritario el desarrollo de actividades de educación ambiental que promuevan la participación pública en todo el procedimiento de evaluación ambiental, desde las etapas más tempranas de los proyectos.



¿La normativa provincial prevé un procedimiento de consulta especial, en caso de que el proyecto afecte directa o indirectamente territorios de pueblos originarios o comunidades indígenas?

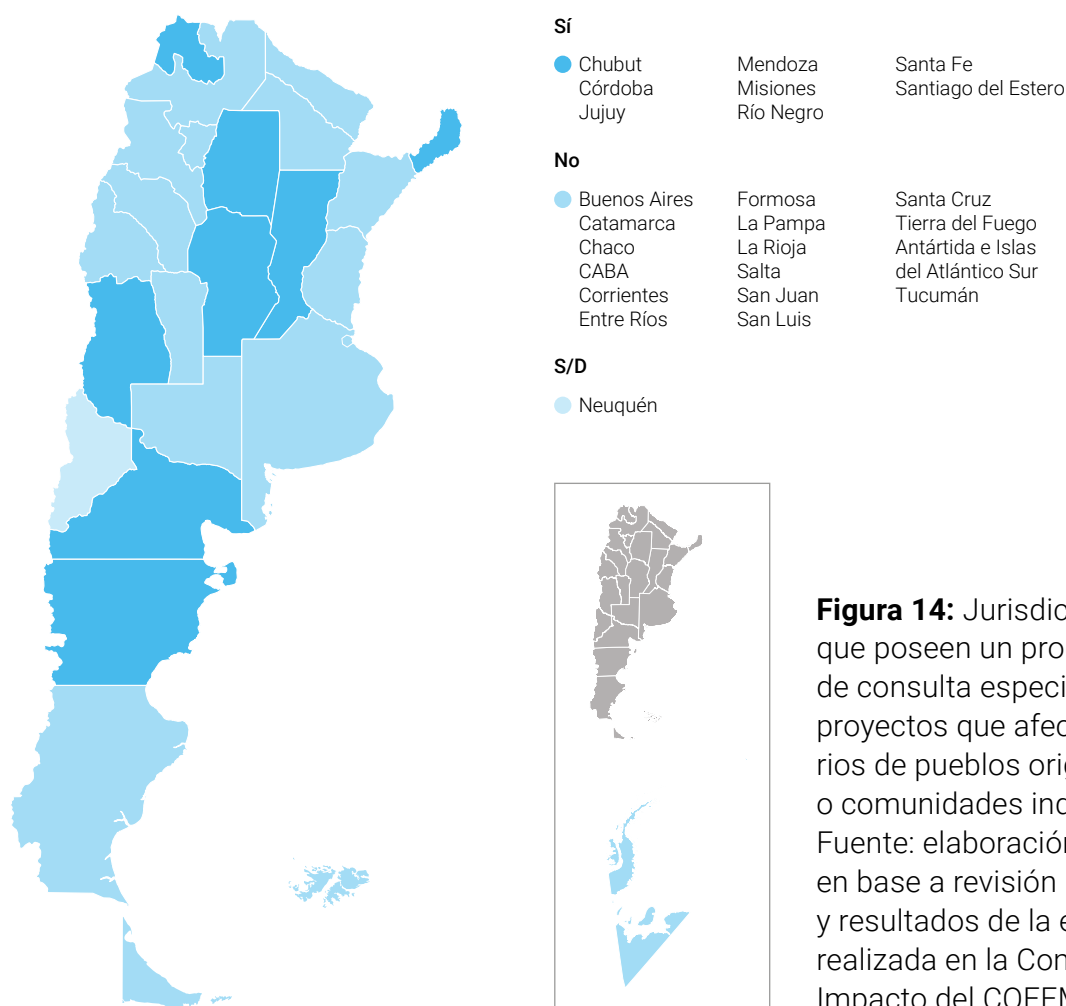


Figura 14: Jurisdicciones que poseen un procedimiento de consulta especial para proyectos que afecten territorios de pueblos originarios o comunidades indígenas. Fuente: elaboración propia en base a revisión normativa y resultados de la encuesta realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA.

Los pueblos originarios son sujetos de derecho colectivo, y por ende, titulares del derecho de consulta previa. El término pueblos indígenas comprende organizaciones territoriales (sea de 1°, 2° y 3° grado conforme a la Resolución n.º 328/2010 INAI) y comunidades indígenas según la Ley n.º 23302.

En Argentina, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el organismo de consulta y autoridad de aplicación de la Ley n.º 23302, que representa estos derechos a nivel nacional. La obligación de consultar a los pueblos originarios en relación a actividades, proyectos o acciones que puedan afectarlos se establece desde diferentes niveles.

La Constitución Nacional, en su art. 75, inc. 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y establece que se debe “asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.

A nivel internacional, el Derecho de Consulta ofrece los siguientes instrumentos con jerarquía suprallegal (art. 75, inc. 22):

- El Convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Ley n.º 24071).
- La Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).

En este punto corresponde además mencionar al ya citado Acuerdo de Escazú, en tanto también contiene disposiciones relativas a pueblos originarios. El acuerdo determina que, en su implementación, cada Parte garantizará el respeto de su legislación nacional y de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.

Según los resultados de la encuesta, a 2020 8 jurisdicciones poseen un procedimiento de consulta especial para proyectos que pudiesen afectar territorios de pueblos originarios o comunidades indígenas: Chubut, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero. Este número significa un aumento de tres casos más con respecto a lo relevado en 2019.

3.5. Tendencias en evaluación ambiental a nivel nacional

Cambio climático y evaluación de impacto ambiental

La Ley n.º 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación en todo el territorio nacional en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.

Esta norma otorga un rol muy importante a la evaluación ambiental. Establece que el desarrollo de métodos y herramientas para evaluar los impactos y la vulnerabilidad es una de las finalidades del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, con el fin de permitir la adaptación al cambio climático en los diferentes sectores socioeconómicos y sistemas ambientales del país (art. 18, inc. b). También dispone, entre los contenidos mínimos de esta planificación, la definición y aplicación de los métodos y herramientas para evaluar los impactos y la capacidad de adaptación de los sistemas sociales y naturales (art.19, inc. b), y el desarrollo de directrices para incorporar en los procesos de evaluación de impacto ambiental las consideraciones relativas a los impactos del cambio climático (art.19, inc .g).

La interrelación entre cambio climático y evaluación ambiental se manifiesta en estrategias de adaptación a partir del análisis de impactos y riesgos, y en estrategias de mitigación a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Las estrategias de adaptación al cambio climático en las evaluaciones ambientales incorporan los aspectos del cambio climático en los componentes de línea de base de los estudios de impacto ambiental a través de modelos climáticos, que se utilizan como herramienta transversal. Estos modelos permiten, en un contexto de incertidumbre científica, analizar distintos escenarios de forzamiento antrópico —como es el caso del crecimiento poblacional y el desarrollo tecnológico— y su implicancia sobre variables climáticas.

Cabe destacar que para la elaboración de estudios de impacto ambiental se encuentran disponibles los mapas confeccionados por medio del Sistema de Mapas de Riesgo para el Cambio Climático (SIMARCC), los cuales permiten incorporar proyecciones climáticas y su potencial influencia sobre la salud, el ambiente, la infraestructura y la obra pública. Esta herramienta interactiva permite elaborar mapas a partir de la elección de una amenaza, un escenario posible, un período y una proyección optimista o pesimista respecto al cambio climático.

Todos los mapas mencionados se encuentran disponibles para confeccionar y descargar en: <https://simarcc.ambiente.gob.ar/mapa-riesgo>

Actualmente varias provincias requieren que se incorpore la variable del cambio climático en los estudios de impacto ambiental. En el caso de Chaco, Chubut, Corrientes, Mendoza y San Juan, se establece que la variable debe ser incluida en el estudio de impacto ambiental por el proponente del proyecto. Las provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta y Santiago del Estero establecen que la incidencia del cambio climático en estudio de impacto ambiental debe incluirse para ser analizada de forma directa por la autoridad ambiental competente. La provincia de La Pampa ha incorporado recientemente esta variable en su nueva normativa.

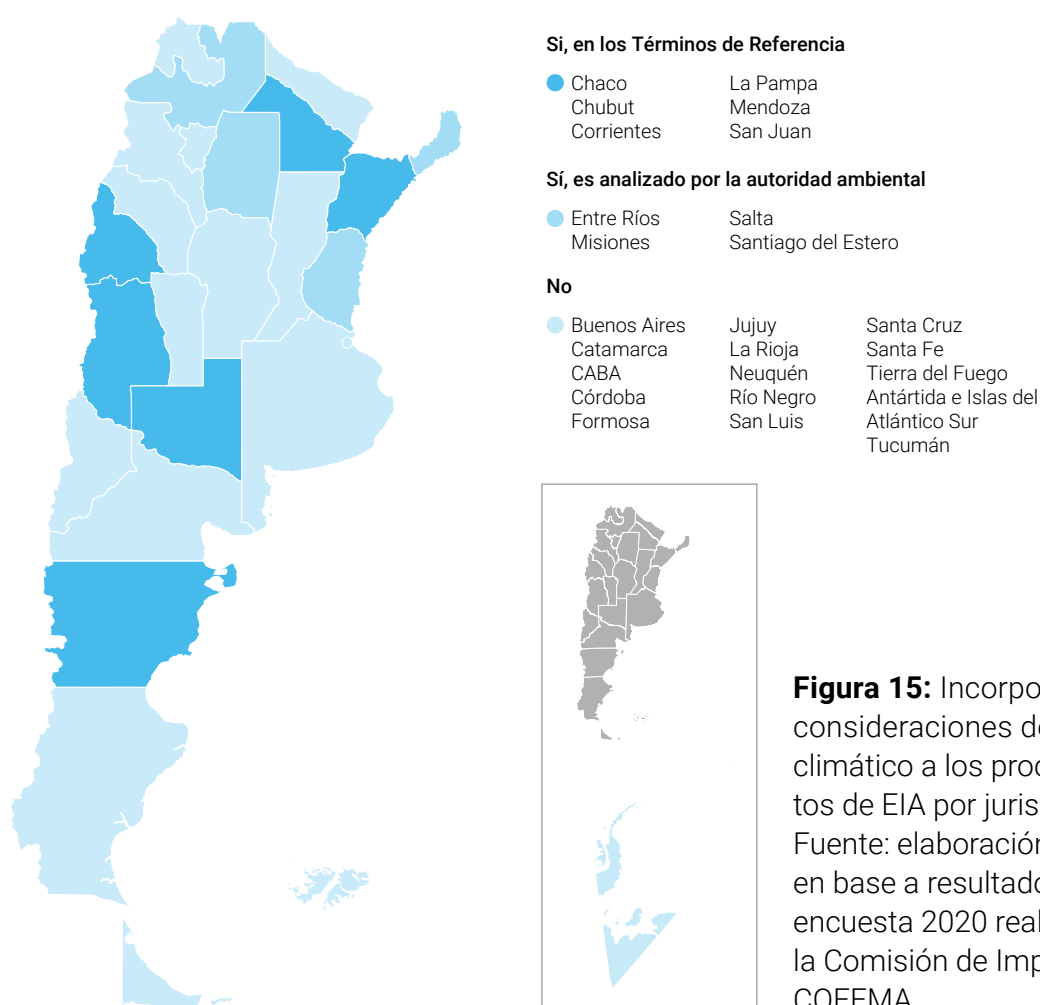


Figura 15: Incorporación de consideraciones de cambio climático a los procedimientos de EIA por jurisdicción
Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta 2020 realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA.

Las estrategias de mitigación al cambio climático en evaluaciones ambientales se enfocan en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La viabilidad de la reducción de emisiones depende del potencial de mitigación en sectores claves, así como de cuestiones vinculadas a las alternativas de tecnología e innovación, según la tipología de proyecto.

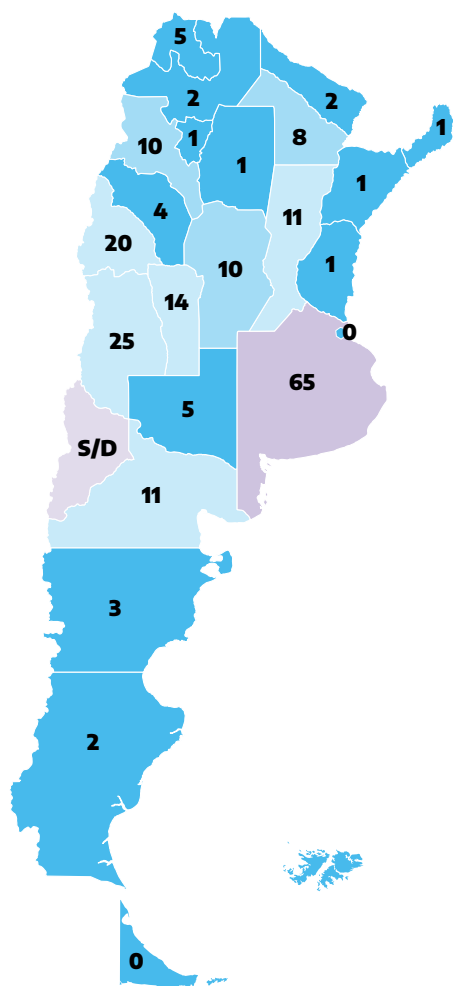
Actualmente nuestro país cuenta con tres planes de acción nacionales:

- > Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático
- > Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático
- > Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático

Estos planes plantean el desarrollo de innovación tecnológica para la reducción de emisiones, estructurado en hitos con indicadores alcanzables, específicos, mensurables y de duración limitada, y con medidas de eficiencia energética de fuentes de energía tanto renovable como no renovable.



Proyectos de energías renovables



0-5

- CABA
- Chubut
- Corrientes
- Entre Ríos
- Formosa
- Jujuy
- La Pampa
- La Rioja
- Misiones
- Salta
- Santa Cruz
- Santiago del Estero
- Tierra del Fuego
- A. e I. A. S.
- Tucumán

6-10

- Catamarca
- Chaco
- Córdoba

11-25

- Mendoza
- San Juan
- San Luis
- Santa Fe

>50

- Buenos Aires

S/D

- Neuquén

Buenos Aires:

Solar fotovoltaica	15
Eólica	42
Biomasa	8

Catamarca:

Solar fotovoltaica	10
--------------------	----

Chaco:

Solar fotovoltaica	6
Biomasa	2

Chubut:

Eólica	3
--------	---

CABA:

	0
--	---

Córdoba:

Proyectos: biomasa/ biocombustibles, energía eólica, solar fotovoltaica	10
---	----

Corrientes:

Solar fotovoltaica	1
--------------------	---

Entre Ríos:

Solar fotovoltaica	1
--------------------	---

Formosa:

Biomasa	2
---------	---

Jujuy:

Solar fotovoltaica	5
--------------------	---

La Pampa:

Eólica	4
Biomasa	1

La Rioja:

Solar	4
-------	---

Mendoza:

Proyectos: Solar Fotovoltaica; energía térmica; eólica; energía hidráulica.	25
---	----

Misiones:

Solar fotovoltaica	1
--------------------	---

Neuquén:

S/D	
-----	--

Río Negro:

Eólica	11
--------	----

Salta:

Solar fotovoltaica	2
--------------------	---

San Juan:

Solar fotovoltaica	20
--------------------	----

San Luis:

Solares	10
eólicos	3
Biogás	1

Santa Cruz:

Parques eólicos	2
-----------------	---

Santa Fe:

Eólico	1
Solares	7
Biomasa	3

Santiago del Estero:

Solar fotovoltaica	1
--------------------	---

Tierra del Fuego A. e I. A. S.:

	0
--	---

Tucumán:

Biomasa	1
---------	---

Figura 16: Cantidad de proyectos de energías renovables por tipología en procedimientos de EIA por jurisdicción. Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta 2020 realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA.

La Ley n.º 25675 establece en su artículo 2 como política ambiental nacional asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, y promover su uso racional y sustentable.

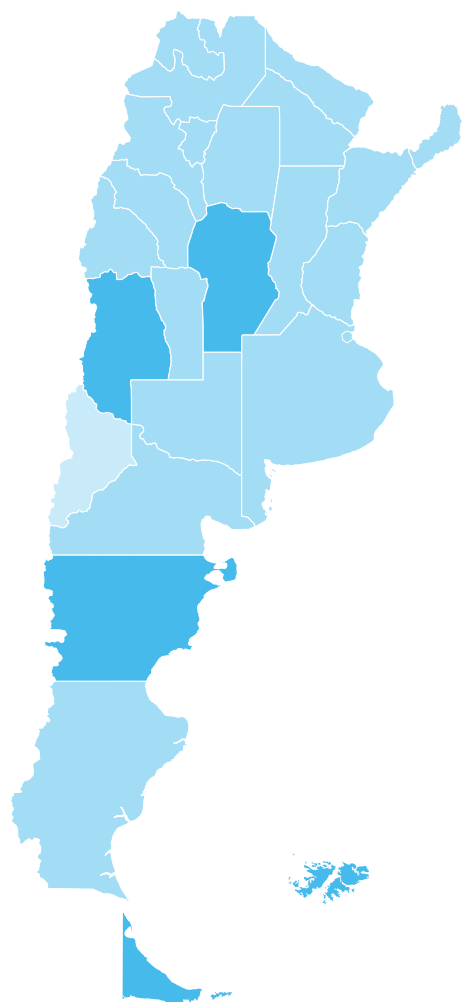
A este respecto fueron sancionadas la Ley n.º 26190, Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía en el año 2006, y su norma modificatoria, la Ley n.º 27191, en el año 2015. Se plantea en ellas como objetivo lograr una contribución de las fuentes de energía renovables al consumo de energía eléctrica nacional.

Según la encuesta realizada, en los últimos dos años se han evaluado 239 proyectos de energías renovables en 21 jurisdicciones. Se trata en su mayoría de proyectos vinculados a fuentes de energía solar, seguidos por proyectos vinculados a fuentes eólicas y de biomasa y, por último, de proyectos vinculados a fuentes geotérmicas.

Restauración y regeneración ambiental

Ante eventos de origen antrópico que puedan necesitar procesos de restauración (ej.: incendios, derrames de sustancias químicas, deforestación, introducción de especies invasoras, etc.), los procesos de regeneración y restauración de ecosistemas necesitarán incorporar criterios y estándares científico-técnicos que permitan evaluar las metodologías y la progresividad con que estos proyectos se llevan a cabo.

En relación con estos criterios y estándares, las provincias de Chubut, Córdoba, Mendoza y Tierra del Fuego contemplan procesos de evaluación ambiental para la reintroducción de especies extintas en cuanto a flora o fauna, en el marco de proyectos o actividades de restauración de especies o ecosistemas.



Sí

● Chubut
Córdoba

Mendoza
Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur

No

● Buenos Aires
Catamarca
Chaco
CABA
Corrientes
Entre Ríos

Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Misiones
Río Negro

Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tucumán

S/D

● Neuquén



Figura 17: Incorporación de procesos de restauración ambiental a los procedimientos de EIA por jurisdicción. Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta 2020 realizada en la Comisión de Impacto del COFEMA.

Referencias

- > **AIDA-Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente** (2021). *Buenas prácticas a nivel mundial para los estudios de impacto ambiental. Una guía para las políticas públicas en América Latina y el Caribe.*
- > **Banco Interamericano de Desarrollo & World Justice Project** (2020). *Indicadores de Gobernanza Ambiental para América Latina y el Caribe. Una evaluación de la gobernanza ambiental en la práctica en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Perú, República Dominicana y Uruguay.*
- > **IAIA-International Association for Impact Assessment** (2020). *The Impact of COVID-19 on Impact Assessment: An Initial Rapid Review.* Publicado en mayo de 2020.
- > **IAIA** (2019) *Impact Assessment and the Sustainable Development Goals (SDGs). Fastips.* Autores: Maria Partidário & Rob Verheem. Publicado en enero de 2019.
- > **PNUMA-Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente** (2019). *Environmental Rule of Law: First Global Report.* Nairobi, enero de 2019.
- > **SAyDS - Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable** (2019). *Guía para fortalecer la participación pública y la evaluación de los impactos sociales.* Buenos Aires, Argentina.

Argentina **unida**



Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Argentina

